Asamblea General del Profesorado, UdeA
Martes 29 de julio de 2025
(Relatoría)

Temática: Análisis y perspectivas sobre la multicrisis por integrantes del CSU y representaciones profesoras.

Moderación: Yadira Eugenia Borrero Ramírez, Representante profesoral (s) ante el Consejo Académico y Mauricio Múnera Gómez, Representante profesora (s) ante el Consejo Superior Universitario.

Invitados: Giovani Caro Uribe, Representante de los egresados, CSU; Juan Carlos Bolívar Sandoval, Representante del MEN.

Con una participación de 137 participantes virtuales y 18 en el auditorio, se llevó a cabo la asamblea del profesorado de carácter deliberativa.

Resumen: Durante esta reunión, los participantes discutieron la grave crisis financiera y administrativa de la Universidad de Antioquia, destacando problemas estructurales de planeación, liderazgo y control financiero. Se enfatizó la necesidad de un diálogo vinculado con la comunidad universitaria para construir consensos y una hoja de ruta para enfrentar esta crisis, incluyendo propuestas de reestructuración, transparencia en el manejo de recursos y una revisión profunda del modelo universitario actual. Además, el representante del Ministerio de Educación expuso los esfuerzos del Gobierno nacional en el aumento presupuestal y la disposición para apoyar procesos de formalización y fortalecimiento institucional.

Contexto y diagnóstico de la crisis

- Se reconoció una grave crisis estructural en la Universidad de Antioquia, principalmente financiera, pero también relacionada con problemas administrativos, de liderazgo y de planeación.
- La crisis financiera ha ido en aumento durante los últimos 8-15 años, con un crecimiento desordenado ("crecimiento sin techo") de actividades misionales y no misionales, sin la correspondiente financiación estatal.
- Se señaló un uso inadecuado de los recursos, incluyendo gastos elevados en costos de funcionamiento, precarización laboral, tercerización y mal manejo de contrataciones, especialmente horas cátedra.
- La universidad ha ido disminuyendo su patrimonio mediante ventas de activos considerados "improductivos" como la Hacienda El Progreso, situaciones que se perciben como soluciones temporales y no estructurales.

Fallas Identificadas

- Planeación y liderazgo: Se enfatizó que existen graves fallas en la planeación y un liderazgo en negación que no enfrenta la crisis de forma decidida.
- Control interno: Auditorías internas y externas, comités de austeridad y contralorías han fallado en emitir alertas y establecer límites claros.
- Relaciones institucionales: Privatización interna, tercerización, y conflicto con entidades vinculadas como el hospital universitario han generado problemas adicionales.
- Falta de diálogo y participación: Se denunció la baja participación democrática y la necesidad de ampliar espacios vinculantes para toda la comunidad universitaria.
- Transparencia e información: La información financiera proporcionada a los órganos de gobierno ha sido insuficiente, parcial o de baja calidad, dificultando la toma de decisiones acertadas.

Propuestas y demandas presentadas

- Cambio de liderazgo y equipo administrativo: Se solicitó un cambio en el equipo directivo y en el estilo de administración para afrontar la crisis con expertos financieros y en planeación.
- Revisión y suspensión temporal de gastos innecesarios: Es necesario revisar y suspender gastos suntuarios que no afectan directamente la calidad académica ni el acceso a la educación.
- Fortalecimiento del control y la transparencia: Mayor presencia y participación de los estamentos en los comités de austeridad y veedurías, con acceso adecuado a la información financiera.
- Diálogo amplio y vinculante: Creación de un gran diálogo universitario para construir consensos sobre el proyecto institucional, criterios de crecimiento y estrategias para la sostenibilidad financiera.
- Modernización normativa y estructural: Actualización de planes de desarrollo, reglamentos, políticas académicas y administrativas para adaptarlos a las necesidades actuales y futuras.
- Formalización laboral: Se destacó la importancia de implementar el decreto de formalización laboral para profesores de cátedra, con participación activa de sindicatos y transparencia en los procesos.
- Construcción de una hoja de ruta conjunta: El Ministerio propone la construcción colectiva de un plan estratégico para afrontar la crisis con plazos y etapas definidas, considerando la participación de toda la comunidad universitaria.

Papel del Gobierno nacional y del MEN

- El Gobierno ha incrementado sustancialmente el presupuesto del sistema de educación superior pública y ha cumplido con entregas y anticipos de recursos, aunque estos recursos no han sido suficientes para cubrir todas las obligaciones.
- Se reconoció que la crisis no es responsabilidad exclusiva del Gobierno, sino de una prolongada acumulación de malas decisiones internas.

- El Ministerio respeta la autonomía universitaria y propone apoyar procesos de diálogo, capacitación técnica y fortalecimiento de veedurías.
- Es posible la intervención o toma de posesión en caso necesario, pero se prefiere evitar medidas autoritarias privilegiando acuerdos internos.
- Anunció la realización de un foro para informar y dialogar sobre la formalización laboral.

Cuestiones y debates críticos

- Diferencias y cuestionamientos sobre la evaluación del rector: se aclaró que la calificación busca fomentar un plan de mejoramiento, no es punitiva ni una solicitud de renuncia.
- Dificultades para obtener información financiera clara, lo que ha dificultado la fiscalización y control.
- Debate sobre la autonomía universitaria: se enfatizó que no debe usarse para cometer irregularidades ni evitar la rendición de cuentas.
- Existencia de “castas” políticas y académicas que han perpetuado malos manejos y que generan resistencia a cambios profundos.
- Preocupación por el impacto de posibles medidas sobre la calidad académica y la equidad dentro de la universidad.
- Reiterada demanda de mayor participación democrática efectiva y real incidencia en las decisiones.
- Debate sobre el uso y posible abuso de contratos de profesores de cátedra y la necesidad de aclarar la cifra real de horas dedicadas a docencia directa.

Acuerdos y compromisos

- Se propone convocar una nueva Asamblea para continuar la deliberación con más tiempo, enfocándose en la definición de una ruta de solución y acuerdos para manejar los disensos.
- El representante del Ministerio se comprometió a asistir a futuras asambleas y foros organizados por la comunidad universitaria para mantener el diálogo abierto y transparente.
- Se valoró la ventana de oportunidad política actual para abordar la crisis conjuntamente.
- Se impulsará la sistematización documental de la crisis para fundamentar mejor las propuestas y acciones futuras.
- Se incentivará la construcción de consensos intersectoriales y el fortalecimiento de los órganos de control y participación dentro de la universidad.

Conclusión: La reunión evidenció una crisis profunda y multidimensional en la Universidad de Antioquia que requiere un manejo urgente y responsable desde todos los actores: comunidad universitaria, administración, órgano de gobierno y Estado. Se señala la necesidad imperiosa de cambiar el modelo de gestión, incrementar la transparencia, fortalecer la participación democrática y construir una hoja de ruta conjunta que permita la

sostenibilidad financiera y académica, preservando la autonomía y la función social de la universidad. El Gobierno nacional manifestó su apoyo con recursos y disposición al diálogo, pero subrayó que la solución final depende de llamados claros al cambio y acuerdos al interior de la Universidad.

Intervención Giovanni Caro, Representante de Egresados, CSU

Inició su intervención ofreciendo disculpas por su breve permanencia en la Asamblea, ya que debía comparecer ante un juez a las 10 a. m., situación que le resultaba ineludible. No obstante, manifestó que no podía dejar de asistir a un espacio que considera de importancia fundamental.

Planteó que una de las principales dificultades del proceso de deliberación es la posibilidad de construir acuerdos colectivos a partir de la diversidad de conocimientos, experiencias e ideas que convergen en la comunidad universitaria. Dijo que esa dificultad es estructural y no tiene una salida sencilla.

Desde el inicio de su intervención, fue enfático en una afirmación que reconoce como incómoda para muchos sectores: la Universidad de Antioquia está en crisis. No se trata de una proyección a futuro, dijo, sino de una situación que se vive en el presente, el 29 de julio de 2025. Consideró necesario nombrarla con claridad, aun sabiendo que no todos comparten esa mirada.

Sobre las tareas propuestas para la jornada —identificar causas, proponer formas de abordaje y plantear soluciones—, Caro abordó en primer lugar la estructura que impuso la Ley 30. Si bien reconoció su carácter innovador en su momento, señaló que hoy resulta insuficiente y genera fisuras evidentes. Consideró que la reforma de la Ley sería la vía más pertinente, pero sostuvo, con base en su experiencia política, que esa reforma es altamente improbable en el contexto actual, y más aún a ocho meses de unas elecciones nacionales.

Se refirió también al déficit presupuestal como una causa evidente de la crisis. Señaló que, aunque sería deseable construir un bloque institucional para solicitar recursos a los gobiernos nacional, departamental y municipal, esa estrategia también encuentra límites. El gobierno nacional ha incrementado el presupuesto de manera histórica, la Gobernación ha hecho esfuerzos más allá de sus competencias legales, y el municipio ha declarado abiertamente que no considera que el problema le corresponda. Por tanto, evaluó que la posibilidad de un acuerdo financiero entre los tres niveles de gobierno es baja.

Advirtió que la crisis no es un escenario hipotético sino una urgencia inminente. Estimó que la universidad tiene un margen operativo de cinco meses y que podría enfrentarse a una cesación de pagos en octubre o noviembre. “Hoy sobrevivimos mes a mes”, señaló, y aunque se celebraba haber llegado a agosto, no había certezas sobre la sostenibilidad financiera a corto plazo.

Caro identificó también causas internas en la Universidad. Llamó a hacer una revisión profunda de los procesos institucionales, prioridades y objetivos, no con ánimo de señalar culpables, sino para identificar rutas que permitan la sostenibilidad. En ese sentido, relató su experiencia en el Comité de Austeridad, al que ingresó con escepticismo. Inicialmente se preguntaba qué sentido tenía discutir recortes por 10 mil millones frente a un déficit de 181 mil. Sin embargo, afirmó haber comprendido que en una crisis cada peso cuenta y que incluso lo aparentemente insignificante es relevante.

Reconoció además las limitaciones en su ejercicio de representación. Expresó que no ha logrado establecer un canal efectivo para consultar a los egresados y que, por tanto, no puede hablar en nombre de todos. Por esa razón, sostuvo que su intervención se da a título personal. Aun así, destacó que en el Comité de Austeridad sí existieron ejercicios de consulta, aunque limitados.

Planteó que es necesaria una reestructuración de la representación universitaria, comenzando incluso por los mecanismos que lo llevaron al Consejo Superior. Cuestionó que un representante de egresados llegue con apenas nueve votos y propuso revisar a fondo los procedimientos actuales de elección y participación.

Caro valoró que el Consejo Superior ha cambiado y que las discusiones hoy son más abiertas. Afirmó que este es un momento histórico, aunque no se sabe cuánto durará, y lo consideró una oportunidad. Se mostró dispuesto a asistir a asambleas de facultades, encuentros con estudiantes y cualquier espacio de deliberación, reconociendo que esta coyuntura requiere disposición al diálogo.

Al referirse a la formalización laboral, manifestó haber seguido con atención el reciente foro sobre el tema. Reconoció que hay voluntad, pero también serias dificultades jurídicas. Indicó que no ha encontrado un mecanismo legal que permita priorizar a los profesores de cátedra con trayectoria, y que cada intento de propuesta termina con la advertencia de que sería ilegal. Señaló que, si no se logra resolver este punto, el riesgo es que ellos —los docentes de cátedra— terminen pagando los costos de la crisis. Reiteró la necesidad de no caer en ilegalidades que puedan derivar en demandas judiciales, pero insistió en que no se puede permitir que los más vulnerables sean los más golpeados.

En otro momento de su intervención, Caro expresó una contradicción personal: dijo no creer en la figura de la universidad empresa, debido a su formación política en los años 90. Sin embargo, ante la falta de respuesta suficiente por parte de los gobiernos, se preguntó cómo puede sobrevivir una universidad pública e investigativa sin recursos adicionales. Consideró que es una tensión real y que debe ser debatida sin temor.

Relató que, al ingresar al Consejo de Facultad, le parecía inaceptable que se pidiera a las facultades gestionar sus propios recursos. Hoy, sin embargo, se encuentra hablando de

contratación eficiente, relación con el Estado y competitividad. Reconoció abiertamente la dificultad de conciliar esas posturas.

Expresó que le gustaría que la solución fuera sencilla, como el giro de los 363 mil millones del déficit histórico, o el giro de los 181 mil millones faltantes de este año. Pero reconoció que esos recursos no van a llegar, y por eso insistió en la necesidad de tener una discusión amplia, incluso sobre modelos que históricamente han generado resistencia.

Finalizó con una anécdota relacionada con la reciente elección estudiantil. Contó que, en el Consejo, se debatió la posibilidad de ampliar los requisitos de participación, y que al principio le pareció una buena idea. Sin embargo, al tratarse de un proceso en curso, consideró que cambiar las reglas en la mitad del camino habría sido un error. Saludó la llegada del nuevo representante estudiantil y defendió la importancia de respetar las normas establecidas.

Cerró su intervención citando un dicho popular: “El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”. Agradeció el espacio y ofreció disculpas por su salida apresurada, motivada por su cita judicial.

Intervención Juan Carlos Bolívar, Representante del MEN, CSU

Inició su intervención agradeciendo la invitación del profesorado y explicó que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha recibido una directriz clara: promover un diálogo directo con las comunidades universitarias, incluyendo a profesores, estudiantes y egresados. Señaló que este ejercicio de interlocución, aunque más exigente que las funciones administrativas tradicionales, es esencial para un gobierno que se reconoce como popular, comprometido con romper las barreras que aíslan la función pública.

Recordó que el MEN publicó recientemente una comunicación —firmada por él mismo— que expone las preocupaciones estructurales frente a la Universidad de Antioquia, especialmente la falta de planeación financiera a mediano y largo plazo. Advirtió que, en lugar de adoptar decisiones para garantizar la sostenibilidad de la institución, estas han sido postergadas, lo que ha derivado en una grave crisis de caja. Aunque reconoció que los análisis desde la comunidad universitaria pueden ser éticos o misionales, insistió en que la urgencia más crítica es financiera, pues esta crisis refleja un problema estructural más profundo.

Indicó que la Universidad ha agotado su patrimonio de forma acelerada desde 2016, cuando contaba con aproximadamente 800 mil millones de pesos. En ese contexto, cuestionó decisiones como la venta de activos estratégicos —por ejemplo, la hacienda El Progreso— para cubrir gastos operativos, lo cual calificó como una medida inconveniente tanto por sus condiciones contractuales como por sus efectos limitados sobre la liquidez.

Subrayó la preocupación del MEN ante la falta de toma de decisiones, reflejada también en la reciente calificación del rector por parte del CSU. Aclaró que el Consejo debe formular políticas, no coadministrar, y que el MEN no pretende intervenir en la autonomía universitaria, pero sí tiene la obligación de expresar sus preocupaciones por los canales institucionales.

Resaltó avances del Gobierno en redistribución presupuestal en el sistema público de educación superior. Con los mismos recursos que antes beneficiaban a 15 mil estudiantes (bajo programas como *Ser Pilo Paga* o *Generación E*), hoy se atiende a más de 150 mil. En ese marco, reconoció la relevancia nacional de la Universidad de Antioquia y afirmó que por ello el MEN sigue de cerca su situación financiera y administrativa.

Entre 2022 y 2025, el presupuesto del sector educativo pasó de 64 a 79 billones de pesos (un aumento acumulado del 16,7 %), destinando 11,9 billones a gratuidad y 2,1 billones al funcionamiento de las universidades en 2025. En el caso de la UdeA, el presupuesto de funcionamiento asciende a 709 mil millones de pesos, incluyendo incrementos sostenidos desde 2022. Adicionalmente, recibirá 37 mil millones del acuerdo de fortalecimiento de base firmado en 2018, así como 39 mil millones por gratuidad, que desde 2026 pasarán a ser parte del presupuesto de funcionamiento.

Presentó además una visualización del aumento acumulado en las transferencias a la UdeA, que en 2025 sumarán cerca de 100 mil millones adicionales. Frente a esto, afirmó que la causa de la crisis no es la falta de recursos, sino la falta de decisiones.

Explicó por qué no se han asignado mayores recursos de inversión: la Universidad no ha radicado oficialmente proyectos completos, particularmente en infraestructura. Aunque existen conversaciones preliminares sobre sedes en Ciencias de la Salud, Apartadó, El Bagre y Arboletes, ninguna ha sido formalizada.

Detalló la distribución de los 37 mil millones mencionados previamente:

- 18 mil millones se orientan al cierre de la brecha histórica en educación superior.
- 11 mil millones apoyan planes de cobertura en sedes regionales subutilizadas.
- 4 mil millones fortalecen cobertura territorial en zonas de difícil acceso.
- 7 mil millones se destinan a bienestar universitario.
- 4 mil millones impulsan la formalización docente.

Sobre este último punto, alertó que existen más de 7.000 contratos de cátedra vigentes en la UdeA, muchos de los cuales, según el MEN, están siendo utilizados para tareas distintas a la docencia directa, lo cual es inadecuado tanto desde lo misional como desde lo financiero.

Reiteró que ninguno de los proyectos mencionados ha sido radicado ni está en proceso de aprobación, lo cual impide programar recursos específicos para ellos. No obstante, las conversaciones con la Universidad continúan.

Destacó que la política de gratuidad ya cubre al 90 % del estudiantado de la UdeA y que, a partir de 2026, esos recursos se incorporarán al rubro de funcionamiento. Con este ajuste y otros factores (como la inflación proyectada), se estima que el presupuesto base de la Universidad podría alcanzar entre 800 y 850 mil millones de pesos en 2026.

Afirmó que el compromiso del Gobierno con la educación superior pública es concreto y sostenido, y rechazó la narrativa según la cual la crisis de la UdeA se debe a falta de apoyo estatal. Reconoció los problemas de caja del último trimestre de 2024, pero aseguró que este año los giros se han realizado oportunamente. Incluso, la Universidad ha solicitado adelantos del Plan Anual de Caja (PAC), medida que solo posterga el problema de fondo: la incapacidad de pagar nóminas a futuro si no se toman decisiones estructurales.

Señaló que algunas medidas necesarias han sido evitadas por su posible impopularidad. Consideró también que falta un diálogo profundo dentro de la comunidad universitaria que permita construir consensos y asumir responsabilidades compartidas. Afirmó que muchas personas estarían dispuestas a ceder temporalmente ciertas demandas si se reconoce la magnitud de la crisis, como lo expresó una profesora en una intervención previa.

Concluyó destacando la necesidad de abordar esta crisis desde diversas perspectivas: la del profesorado, informada y crítica; la del Ministerio, sustentada en datos y responsabilidad fiscal; y la de otros actores institucionales, como el CSU. Afirmó que la salida solo es posible mediante un diálogo franco y colectivo que permita construir propuestas viables para superar la situación.

Intervención de Claudia Puerta Silva, Representante Profesoral CA, CSU

Inició su intervención excusando su ausencia física por motivos de salud. Señaló la dificultad de intervenir al final de la sesión, reconociendo el valor de las intervenciones previas y proponiéndose enfatizar algunos aspectos desde una perspectiva académico-administrativa.

Planteó que la crisis actual debe analizarse desde la función académica como eje misional y estructurante, recordando que la administración universitaria debe estar al servicio de la academia. Por ello, insistió en que las decisiones financieras, de planeación y gestión deben articularse con el cumplimiento de la misión institucional.

Destacó que, en los últimos años, la Universidad ha vivido ciclos de movilización social que han revelado múltiples crisis: de género, éticas, políticas, financieras y de gobernabilidad. Subrayó la necesidad de reconocer y caracterizar críticamente los problemas, y de avanzar hacia soluciones institucionales estructurales.

Enfatizó que no ha habido una apuesta clara por fortalecer la participación sustantiva y vinculante. Aunque se han abierto espacios de información, no se ha propiciado un verdadero diálogo para construir acuerdos. En este sentido, propuso establecer un gran diálogo universitario, con participación activa de todos los estamentos, que permita definir:

1. Un proyecto de Universidad con horizonte a corto, mediano y largo plazo.
2. Criterios básicos para ordenar y priorizar el crecimiento institucional.
3. Estrategias concertadas para garantizar el acceso a una educación pública de calidad y la sostenibilidad financiera.

Enfatizó que este diálogo debe estar mediado por la transparencia, el control interno efectivo y una rendición de cuentas basada en el diálogo y la corresponsabilidad.

Alertó sobre la falta de análisis crítico respecto al crecimiento institucional, tanto en funciones misionales como no misionales. Señaló que la Universidad ha crecido sin la financiación estatal proporcional, asumiendo proyectos e infraestructuras que comprometen la sostenibilidad. Subrayó la necesidad de evaluar este crecimiento de manera articulada y con criterios acordados, priorizando la garantía del derecho a la educación, la calidad académica y la sostenibilidad.

Planteó que la expansión de servicios y proyectos asociados a la extensión contratada, como laboratorios, servicios de salud y producción de medicamentos, deben ser revisados en términos de su sostenibilidad y pertinencia. También cuestionó los efectos de este modelo de expansión, que ha reproducido dinámicas propias del mercado, generando competencia interna, fragmentación y círculos cerrados de poder.

Expresó la necesidad de evaluar éticamente estas prácticas, muchas de ellas legalmente constituidas, pero que requieren revisión a la luz del interés público y universitario. Reiteró que todos los estamentos han demostrado disposición para aportar a un pacto colectivo por la universidad.

El tercer aspecto que abordó fue la planeación y actualización normativa. Subrayó la urgencia de que la comunidad universitaria tenga un papel incidente en la formulación del nuevo Plan de Desarrollo y en la definición de los planes de acción institucionales y de las unidades académicas. Planteó que se requieren acuerdos fundamentales para ajustar los ejes misionales, la estructura organizativa y las normas que rigen la vida universitaria.

El cuarto y último punto abordó la persistencia de las violencias, especialmente las basadas en género, dentro de los campus. Señaló que estas violencias expresan malestares y desigualdades que aún no se han superado, coexistiendo con un modelo que, pese a su orientación pública, reproduce lógicas neoliberales. Por ello, insistió en que la universidad debe seguir siendo un espacio de oportunidades reales y de transformación social.

Finalmente, refiriéndose a la crisis financiera, llamó a revisar con responsabilidad y sentido ético los gastos institucionales, incluyendo aquellos que podrían considerarse suntuarios en el actual contexto, y propuso que las medidas económicas no deben agravar las desigualdades ni comprometer la calidad educativa. Insistió en que cualquier ajuste debe ser producto de acuerdos colectivos, con disposición al diálogo, autocrítica y corresponsabilidad por parte de toda la comunidad universitaria.

Intervención de Juan Carlos Bolívar, Rep. MEN

Propuso organizar un evento con la presencia del Viceministro de Educación, quien ha manifestado interés en visitar la Universidad de Antioquia para presentar directamente el proceso de formalización laboral, uno de los principales proyectos normativos del Ministerio. Este espacio facilitaría la socialización directa de los objetivos ministeriales.

Respecto al informe de la Subdirección de Inspección y Vigilancia, Bolívar aclaró que su contenido es reservado debido a la naturaleza delegada de esta función por el presidente al ministro, y a sus posibles efectos sancionatorios. Informó que el documento está próximo a emitirse, pero que desde la delegación ministerial solo se conocen avances generales, por lo que no es posible divulgar detalles ni anticipar medidas.

En cuanto a la propuesta del Ministerio para la Universidad, enfatizó que se fundamenta en una construcción colectiva con los estamentos universitarios. Resaltó el aumento sustancial de recursos para la educación superior, junto con iniciativas como la formalización laboral, ampliación de cobertura financiada, consolidación de la gratuidad y reconocimiento de compromisos derivados de las movilizaciones estudiantiles de 2018.

Subrayó el respeto absoluto por la autonomía universitaria y descartó imposiciones unilaterales, señalando que el Gobierno rinde cuentas y busca soluciones conjuntas con la comunidad universitaria, no dictar directrices externas.

Abordó también problemáticas administrativas internas, especialmente la necesidad de clarificar el uso de contratos de cátedra, e informó que ha solicitado información detallada sobre horas de docencia directa sin obtener respuestas satisfactorias. Esta carencia ha sido reiterada ante el Consejo Superior y fue incluida en la evaluación ministerial del rector.

Manifestó preocupación por la opacidad en aspectos financieros clave —movimientos contables, cierres de caja y uso de recursos—, que dificulta acciones correctivas. Recordó que el rector debe presentar un plan de mejoramiento con medidas viables a corto, mediano y largo plazo para reducir la brecha entre ingresos y costos operativos.

Resaltó que, aunque el Consejo Superior tiene funciones estratégicas, no es órgano de coadministración, y que muchas decisiones diarias corresponden exclusivamente a la administración universitaria.

Finalmente, destacó que, pese a tensiones políticas entre los gobiernos nacional y departamental, en el Consejo Superior ha predominado una actitud de responsabilidad institucional y consenso en decisiones clave, principalmente financieras. Llamó a reconocer esta unidad como muestra de madurez y compromiso con la defensa del proyecto público de la Universidad de Antioquia.

Bolívar aclaró que los informes financieros han sido solicitados tanto por él como delegado ante el Consejo Superior, como por la Subdirección de Inspección y Vigilancia, y que, aunque se ha recibido información, esta presenta vacíos que han motivado nuevas solicitudes. Explicó que los equipos técnicos del Ministerio atienden a 69 universidades públicas y varias privadas, lo que limita su capacidad operativa.

Señaló que se han utilizado mecanismos legales —derechos de petición y tutelas— para exigir información. Recordó que el Ministerio cuenta con facultades legales para intervenir universidades, designar rectores, nombrar consejeros y relevar directivos, como ocurre en la Universidad Tecnológica del Chocó, donde se identificó un entramado criminal vinculado con grupos armados ilegales.

Sin embargo, expresó que esa no es la vía deseada para la Universidad de Antioquia, pues, aunque el Ministerio "tiene los dientes", no quiere usarlos de manera autoritaria ni alimentar narrativas de intervención o cooptación. Propuso en cambio construir consensos que incluyan diálogo, análisis técnico y participación comunitaria.

Indicó que la orientación del ministro es participar activamente en espacios asamblearios y comunitarios, en línea con el enfoque de un gobierno popular, y reiteró su disposición personal para asistir, apelando a su trayectoria como exlíder estudiantil y defensor de la universidad pública.

Sobre democracia universitaria, destacó avances en otras instituciones donde se ha reconocido la consulta estamentaria vinculante para elegir rector y se han iniciado procesos constituyentes. Propuso abrir un debate similar en la Universidad de Antioquia, inspirado en experiencias como la Universidad de Nariño, que desde hace ocho años cuenta con una asamblea universitaria con funciones deliberativas y normativas.

Subrayó que estas transformaciones deben surgir desde la comunidad universitaria, con el Ministerio brindando insumos técnicos y acompañamiento institucional. "Nos corresponde escuchar y respaldar las decisiones de quienes viven cotidianamente la universidad", afirmó.

Finalmente, reconoció que legalmente el Ministerio podría intervenir la Universidad de Antioquia, incluso tomar posesión, ante un déficit presupuestal superior a 200 mil millones de pesos. No obstante, insistió en apostar por una ruta basada en el respeto a la autonomía universitaria, garantía de la libertad de cátedra, investigación y pensamiento crítico,

fundamentales durante momentos difíciles como el conflicto armado en Antioquia. Por ello, pidió comprensión hacia la cautela ministerial y el compromiso con soluciones concertadas, no decisiones autoritarias.

Siendo las 12:30 p.m. se da por terminada la asamblea profesoral.